Iniciamos la marcha y decidimos
¡Siempre junto al pueblo!
Revista Insurrección
Edición No.441
Septiembre/08/2014

SUMARIO

EDITORIAL 4
¿Quienes son los Victimarios?

FE en la Causa del Dólar 8
Autor: Comandante Pablo Beltrán

Tres Funcionarios Ilegales y uno en Potencia 11
Autor: Comandante Nicolás Rodríguez Bautista

En Pie de Lucha por la Educación Pública 16
Autor: Lorenzo Alcantuz

La Democracia NO es la Culpable, Lo que Falta es Democracia 20
Autor: Luis Carlos Guerrero Ortega

Quienes son los Victimarios?

Los que levantados en armas participamos en esta guerra interna lo hacemos desde una concepción altruista, bajo el compromiso y la convicción de luchar junto al pueblo, por los CAMBIOS que el país requiere, confrontando a quienes impiden que impere en el país la democracia real, la justicia social, la economía en beneficio del pueblo, la dignidad y soberanía nacional.

En estos 50 años nuestra fuerza ha enfrentado al Estado y las instituciones que lo representan, afectado intereses de la clase en el poder, siempre en defensa de los intereses de las grandes mayorías de la nación con las que nos identificamos porque hacemos parte de ellas, y sus intereses son los nuestros.

Toda guerra produce daños espirituales y materiales de alcances incalculables, afecta personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. La responsabilidad de dichos daños recae sobre las fuerzas contendientes, y no sólo en una de ellas, como pretenden perversamente los medios informativos, para salvar de responsabilidad al Estado.

En la agenda de diálogos entre las FARC y el gobierno, un punto son las víctimas. La forma como el poder mediático y el gobierno presenta este doloroso caso, tergiversa la verdad sobre la responsabilidad en daños y perjuicios a las víctimas, haciendo aparecer a la guerrilla como única victimaria, mentira grosera que impide se conozca la verdad y responsabilidades, elemento esencial para la construcción de una paz real, estable y duradera y garantía de no repetición.

Quien desató esta guerra contra el pueblo fue la oligarquía y el gobierno que la representó en la década 40 del siglo anterior, como lo registra las innumerables denuncias y testimonios sobre crímenes consuetudinarios presentadas por Jorge Eliecer Gaitán; se intensificó a partir de su asesinato, bajo los dictados del imperialismo norteamericano que impuso la política de impedir la supuesta expansión del comunismo.

La respuesta de los campesinos liberales gaitanistas y comunistas fue pasar a la resistencia, para defender la vida y sus bienes organizaron las guerrillas de mitad de siglo. Se calcula que en esta primera etapa de la guerra fueron muertos cerca de 300 mil campesinos, un millón de desplazados y varios

millones de hectáreas robadas a éstos.

En ese entonces no existían las guerrillas revolucionarias de hoy, por lo tanto los victimarios fueron otros: el Estado que agenció esa política, el gobierno y las instituciones que la aplicaron y el gobierno de los Estados Unidos que la orientó. La impunidad ocultó los victimarios, invisibilizó las víctimas y nadie respondió por las crueldades.

En la segunda etapa de esta guerra que contabiliza 50 años, se profundizaron las causas que originaron el conflicto social y armado con la imposición del modelo neoliberal y se degradó bajo el mandato de la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL, impuesta por los Estados Unidos, que establece la existencia de un enemigo interno el cual hay que destruir. Esta concepción adoptada por el Estado convirtió en enemigo interno a todo opositor político y contradictor del régimen, matando de paso la democracia.

Bajo esta concepción fueron eliminados cerca de cuatro mil sindicalistas, decenas de miles de líderes sociales, trabajadores de la educación y defensores de derechos humanos, cientos de miles de campesinos, indígenas y afro descendientes cuyo delito fue vivir en zonas de influencia guerrillera, cerca de seis millones de desplazados, siete millones de hectáreas de buenas tierras expropiadas y cerca de 50 mil desaparecidos.

Ha sido tanta la degradación ética y moral que el Estado no tuvo vergüenza en aliarse con capos del narcotráfico y vincular los ejércitos privados de éstos, a la estrategia contrainsurgente, dando vía libre a la exportación de narcóticos, al terrorismo de Estado y la implantación de la guerra sucia, causando los narco paramilitares más de tres mil masacres de campesinos, decenas de miles de asesinatos en la ciudad y el campo, y el robo de cerca de siete millones de hectáreas de tierra.

Es evidente que en esta degradación de la guerra los victimarios son el Estado, las instituciones que aplican esa doctrina y el narco paramilitarismo.

El ELN también ha causado víctimas en unos casos, por mala aplicación de su política, y en otros por errores de mandos que actuaron por fuera de la política elena; en unos y otros está presto a reconocer los errores, así como a reclamar otros, como víctimas.

La guerra sucia y el terrorismo de Estado no es asunto del pasado, se mantienen vivos y siguen asesinando y amenazando a maestros, sindicalistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición, líderes sociales, periodistas.

Una pregunta necesaria que nos debemos hacer todos los colombianos y amigos de la paz: Podrá haber paz mientras se mantenga la estructura terrorista del Estado y los autores de la guerra sucia estén activos, con la tolerancia del Estado?.

El Presidente Santos, las iglesias y las personas honestas del país, tienten la palabra!!!.

Comandante Pablo Beltrán

FE en la Causa del Dólar

Comenzando este mes de septiembre, un burócrata del Ministerio de minas anunció, que a partir de ahora se generalizará el uso del Fracking en la explotación petrolera colombiana.

Con esta nociva técnica realizan fracturación hidráulica de las distintas capas del subsuelo, para terminar de exprimirles el petróleo que tienen impregnado, causando su derrumbe y la destrucción de las fuentes subterráneas de agua.

Ésta técnica de explotación no convencional está prohibida en varias partes del mundo, debido al severo daño que causa en las aguas y la corteza terrestre, a un grado tal, que genera desplazamientos del suelo y temblores de tierra.

Las sequías de principios de año en Casanare, tienen entre sus causantes, las actividades de sísmica y perforación de las empresas petroleras, a quienes solamente les importa sus ganancias, así estas infrinjan gran daño al medio ambiente y a las comunidades humanas.

En un informe del mes pasado sobre Casanare, "la Contraloría General de la República (CGR) encontró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha desatendido recomendaciones de sus propios manuales de actividades de exploración sísmica, encaminados a conocer el estado del recurso hídrico superficial y subterráneo previo a las labores de exploración, a efecto de contar con criterios, estudios y registros previos al desarrollo de estas actividades".

Antes, la ANH burlaba ella sola las normas ambientales, pero a partir de ahora tal violación, el presidente Santos la adopta como política de su gobierno. Así, el mandatario atiende los pedidos de las multinacionales, de "flexibilizar" las normas ambientales.

Tanta subordinación ante los intereses extranjeros es una conducta constante de la elite gobernante.

Andrés Pastrana expidió la Ley 765 de 2.002, que redujo el monto de las regalías que deben pagar las multinacionales y terminó los contratos de Asociación, para volver al de Concesión, que otorga grandes ventajas al capital extranjero.

Álvaro Uribe con el Decreto ley 1.760 de 2.003 debilitó a Ecopetrol, al transferir el manejo de las reservas de petróleo a la recién creada ANH, y comenzó la privatización de la estatal petrolera, con la Ley 1.118 de 2.006, con la que vendió el 10 por ciento de sus acciones y la colocó al servicio del capital privado.

El resultado de estas medidas fue el esperado. Hoy las multinacionales manejan el 32 por ciento del negocio petrolero del país y Ecopetrol el 68, mientras el gobierno apenas recibe el 43 por ciento de los ingresos producidos, según un estudio de 2.011 del Banco central colombiano. En Venezuela tal porción es del 90 por ciento.

Luis Jorge Garay en la investigación de la CGR, sobre La minería en Colombia, encontró que entre el 2.005 y el 2.010, "las empresas mineras pagaron en promedio 878 mil millones de pesos anuales por concepto de impuesto a la renta... (mientras) tuvieron deducciones, descuentos y exenciones, que representaron un gasto tributario para el país de 1,78 billones de pesos".

Algunos podrán argumentar que la elite dominante no sabe hacer cuentas, pero otra explicación está en que se acostumbró a hacer negocios con las empresas extranjeras, al estilo de la gallina gringa y el marrano colombiano, cuando se asociaron para hacer huevos con tocino.

Las nuevas ventajas que ofrece Santos a las multinacionales, busca interesarlas a traer sus capitales, ahora que al gobierno le fracasó la Ronda 2014 -donde subastó nuevas áreas para exploración petrolera-, porque las empresas solamente contrataron un 28 por ciento del total que les ofrecieron.

El discurso que usa Santos para moralizar a sus tropas dice que su causa es la de Colombia, pero sus acciones de gobierno demuestran que en realidad sirven al interés de las empresas multinacionales. Dicho en pocas palabras, la causa del régimen oligárquico es la del dólar, no la de la sociedad colombiana.

Comandante Nicolás Rodríguez Bautista

Tres Funcionarios Ilegales y uno en Potencia

¿Que tienen que ver con el ex-presidente Uribe?

Luís Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz en el gobierno Uribe, sigue usando la ilegalidad para protegerse de la justicia y pareciera que ello, le hace bien a quienes le dieron dicha investidura, porque son quienes mas lo justifican o guardan silencio por su conducta fuera de la ley; será que si lo capturan "prende el ventilador?

Quienes no olvidan tan rápido la historia saben, que este caballero creó primero y luego desmovilizó, un grupo de delincuentes a quienes autodenominó guerrilleros de las FARC, ganándose con ello varios milloncitos por este "falso positivo".

María Del Pilar Hurtado, Flamante directora del DAS, organismo de ingrata recordación de los colombianos honestos, pero de mucha utilidad para las acciones ilegales del ex-presidente Uribe, huyó de la justicia colombiana y se asiló en Panamá, para protegerse de la justicia colombiana.

Andrés Felipe Arias, alias Uribito, ministro de Agricultura en el gobierno Uribe, también huyó y se escondió en el exterior, para burlar la justicia colombiana, luego de un robo mayúsculo a muchos pobres de Colombia, conocido como el escándalo de "Agro Ingreso Seguro".

Y como esos tres funcionarios ilegales, no son la excepción, ahora aparece el caso de la Ex-contralora Sandra Morelli quien huyó del país y ahora argumenta ser perseguida de la justicia colombiana.

Resulta muy cómodo para estos burócratas, dar duro con el mazo del poder y aprovecharlo para corromperse y hacer ilegalidad, pero cuando su ilegalidad se evidencia, el exterior se les convierte en un buen burladero.

Que los humildes, excluidos del poder y de los destinos de su país, lleguen a la convicción de que solo les queda el camino de la rebelión y que ello los coloca en la ilegalidad, es normal en un país de democracia de mentiras, de Terrorismo de Estado y de las mas grotescas desigualdades sociales; pero que los funcionarios del Estado y del gobierno usen la ilegalidad para esconder sus delitos, demuestra la degradación de un estado CLEPTOCRÁTICO que son conocidos por su práctica "del todo vale".

Desafortunadamente ni los funcionarios arriba nombrados son los primeros ni serán los últimos, en unas instituciones donde se ha perdido el espíritu del servicio y la responsabilidad y se han cambiado por el enriquecimiento ilícito o la politiquería, salvo honrosas excepciones.

Si lo anterior no es suficiente para demostrarlo, veamos lo de la Para-política, en la cual hay más de 100 miembros del Congreso de la república implicados, pero nadie se atreve a tocarlos.

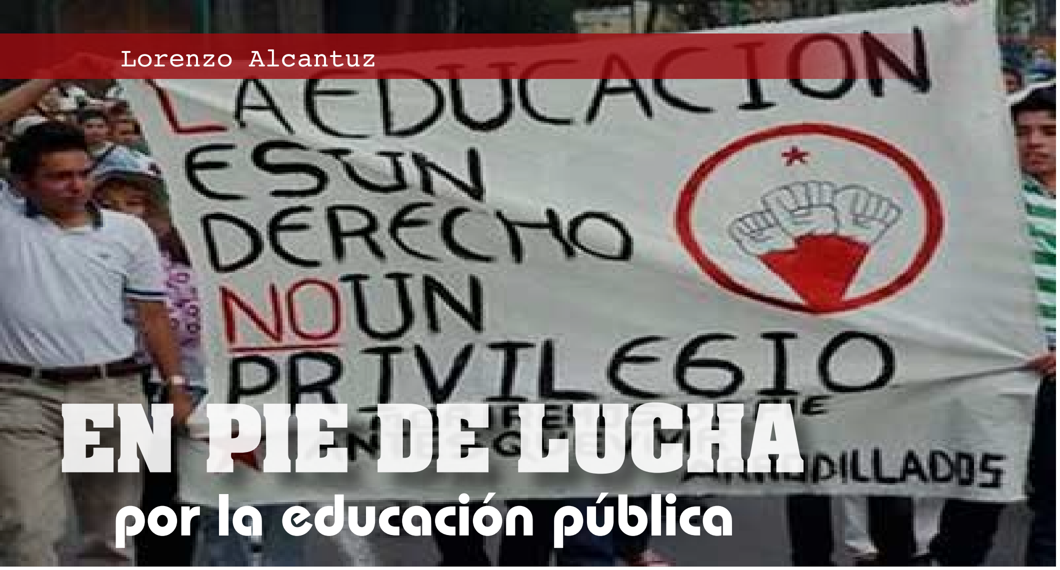
El caso estrella es el del ex-presidente Uribe, ahora Senador. ¿Quien en Colombia no conoce su prontuario delictivo? Hoy sigue siendo cabeza visible de esa corriente de extrema derecha que le hace oposición al presidente Santos.

Los tres primeros funcionarios señalados en este artículo, fueron de los protegidos en su gobierno.

En Colombia no es que no se sepa quienes son y donde están los que desde el poder delinquen, sino que son tan poderosos que nadie se atreve a tocarlos.

Esa es la realidad de nuestro país, por ello es urgente que haya cambios sustanciales donde pueda haber futuro para todas y todos los colombianos.

50
Años
ELN



Lorenzo Alcantuz

EN PIE DE LUCHA
por la educación pública

El 27 de agosto, el magisterio colombiano volvió a protestar en más de cien ciudades del país. Debe recordarse que pocos días antes de las elecciones presidenciales, el 14 de mayo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –FECODE- realizó un paro nacional, que fue levantado a los tres días, luego de una rápida negociación, donde se pactaron los mecanismos para tratar las principales problemáticas en materia de salud, nivelación salarial y el cambio de la evaluación de competencias para los ascensos en el escalafón.

Pero FECODE no sólo lucha por las reivindicaciones particulares para el gremio de los docentes, sino que también hizo parte de las organizaciones sociales que votaron contra la continuidad de la guerra y por la paz con justicia social, que obliga al Estado a realizar las transformaciones estructurales para garantizar el bienestar de la población en general y la educación pública.

Ya ha transcurrido un margen de tiempo prudencial, para que el segundo gobierno de Santos, hubiese demostrado que va a cumplir los compromisos hechos con los docentes. A pesar que en el discurso de posesión, el presidente anuncia que la paz, la equidad y la educación son los tres pilares de su nuevo gobierno, para que en una década Colombia sea el país más educado de América Latina; sin embargo, hay varios hechos que permiten vislumbrar que la prioridad educativa se quedará en mera retórica.

Con mucha alharaca se plantea que la educación será el sector con mayor peso porcentual en el presupuesto del 2015, pero, mientras el monto total aumenta el 6,4 por ciento, el de educación sólo aumenta el 5,7 por ciento, con respeto al 2014. Para el año entrante sólo se aumentará en 1,5 billones de pesos el presupuesto de educación, pero dice la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- que el sólo déficit de las universidades públicas asciende a 12 billones, eso sin contar las proyecciones de crecimiento.

La situación de los establecimientos educativos y su dotación es desastrosa y el presupuesto aprobado no garantiza la cobertura adecuada. Además, si se va a cumplir con la implantación de la jornada única, se necesitaría casi duplicar la oferta de establecimientos, que demandarían cuantiosas inversiones, que no aparecen en ningún presupuesto de financiación.

FECODE plantea que para cubrir los gastos básicos de la educación, se debe pasar del 4,2 por ciento del PIB al 7,5 por ciento del PIB. Eso significa que se requieren otros 20 billones de pesos adicionales para 2015; pero, el actual proyecto de presupuesto para el 2015, se presentó con un faltante de 12,5

billones, es decir, que para las promesas educativas no habrá recursos.

Colombia está en los últimos lugares en la evaluación de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en inglés), que se realiza cada tres años a los alumnos de 15 años. Sin embargo, Santos ofrece que seremos el país latinoamericano más educado, pero sin ningún plan para superar los rezagos estructurales que tenemos.

Sin plantear salidas a la crisis de las universidades públicas, se hace demagogia ofreciendo 400.000 becas y créditos del ICETEX por 513 mil millones de pesos. Lo que significa que los recursos disponibles irán a parar a las arcas de las universidades privadas. Como Santos dice que su "joya de la corona en educación es el SENA", lo que ofrece es una mediana capacitación técnica, como mano de obra barata hacia las empresas. Es decir, capacitar para el trabajo y no educar para la humanización, la vida, la ciencia y la cultura.

Para que los maestros dejen de ser los mártires y se conviertan en los héroes de la patria, como promete el presidente, se requiere que comiencen por brindar un verdadero salario profesional, que ofrezcan posibilidades de capacitación y actualización permanente y que el Estado deje de criminalizar la enseñanza crítica. Ya van más de mil maestros asesinados y son decenas de miles los docentes que han debido desplazarse por amenazas.

Santos II es una simple continuidad de las políticas neoliberales, que desconoce que la educación y la salud son derechos fundamentales, y estable que son servicios, que se ofrecen de forma estratificada, de acuerdo a la capacidad adquisitiva que tengan los usuarios. Así, los ricos tendrán una cobertura de calidad, mientras los pobres están condenados a la ignorancia y la muerte.

Así como Santos y la oligarquía creen que la paz se logra sólo con la desmovilización de las guerrillas, así también, creen que la educación se reduce a adiestrar obreros. Por eso, se requiere la movilización de todo el pueblo, para que la paz sea una construcción de la nueva Colombia y la educación garantice la vida digna.

Ya los maestros y maestras de FECODE, han dado el campanazo de alerta, han vuelto a recordarle a las demás organizaciones sindicales y sociales, que el gobierno no regala nada y que los derechos se exigen al calor de la lucha. Se requiere la reactivación de los estudiantes y los demás estamentos educativos, que sumados a todas las formas organizativas del magisterio, le exijan al gobierno la educación pública, gratuita y de calidad, para todos los colombianos y colombianas.

Luis Carlos Guerrero Ortega

La Democracia NO es la Culpable, Lo que Falta es Democracia

De nuevo el gobierno ha colocado el tema de la consulta previa en la opinión pública. Esta vez, igual que hace un año, el vicepresidente anunció que "existen problemas transversales que deberán ser solucionados, como es el caso de la expedición de las licencias ambientales". También se refirió a que "no se puede seguir abusando de la consulta previa que atrasan indebidamente la ejecución de obras" y manifestó que estas "están frenando y paralizando la ejecución de obras como la doble calzada Buga-Buenaventura"(1).

Al ser preguntado, el vicepresidente con atribuciones de un superministro, que si era el único freno que existía dijo que se están presentando numerosos problemas medio ambientales..... por eso "vamos a proponerle al ministro de Ambiente adoptar disposiciones que, preservando el medio ambiente, acaben con discrecionalidades, reduzcan tiempos y eliminen trasmites innecesarios". Termino diciendo en la entrevista que " francamente, creo que en algunos casos estamos exagerando y en otros la corrupción también está haciendo de las suyas".(2).

He citado largamente estas palabras del señor viceministro para poder apreciar mejor varias cosas relativas a la democracia y el medio ambiente, los cuales ahora resultan culpables del poco despliegue del plan de desarrollo. Estos planteamientos no resultan extraños.

Los gobernantes se ufanan de decir que somos la democracia más antigua del continente, sin embargo cuando se trata de consultar a las comunidades negras e indígenas, lo que en verdad y justicia debe ser otorgada a toda la sociedad, se sale a relucir que el ejercicio de participación, aunque sea a través de una consulta, resulta ser un obstáculo para el país.

Consideramos demasiado graves estas acusaciones del Vicepresidente de la República por que han sido estos señalamientos los que han costado ríos de sangre, mares de desplazamientos y criminalizaciones que terminan en asesinatos de líderes y una cadena de exterminios de pueblos originarios, organizaciones campesinas, obreras, afro e indígenas. El neoliberalismo lo que considera disfuncional a sus políticas los va barriendo y no precisamente con debates y argumentaciones, sino a punta de bala. Los señalamientos de ser freno a las políticas del gobierno son el inicio de una larga cadena de justificaciones que ha permitido criminalizar la resistencia.

Nos encontramos aquí de frente con una democracia que silencia a los que tienen una visión distinta del desarrollo.

Un ejemplo que todavía nos retumba en el alma se refiere a las comunidades indígenas de Córdoba que se opusieron a la construcción de la represa Urrá, por cuanto conlleva a la desaparición de dichas comunidades a las orillas del río San Jorge tal como sucedió con el corregimiento de Frasquillo que desapareció bajo las aguas de la represa. Esta oposición costó la vida

de decenas de líderes los cuales fueron asesinados, cientos de movilizaciones, miles de protestas que de nada valieron ante el imperativo del capital.

Al fin y al cabo las comunidades son obligadas a abrirle paso al "desarrollo" así desaparezcan de sus territorios y sean condenados a la extinción, como sucede actualmente, pues de los 102 pueblos indígenas reconocidos 32 de ellos no alcanzan a tener más de 500 miembros, van camino a dejar de ser.

La consulta no es todo, Es apenas un camino

La consulta es uno de los mecanismos que evita que los territorios ancestrales de nuestros pueblos indígenas y negros sean destruidos y se pierda la vida en comunidad que han constituido durante siglos y que marcan la razón de ser, donde proyectan su ser colectivo que permite la sobrevivencia como pueblo. Este mínimo reconocimiento social y político nace de un reconocimiento mundial de dos cosmovisiones que conciben de manera distinta a los bienes comunes. Y cuando esto sucede hay que buscar que las políticas públicas no lesionen la manera de vivir y relacionarse con el mundo de parte de los pueblos anteriormente descritos. Y es deber de los gobiernos consultarlos antes de acometer cualquier proyecto para tratar de hacer un consenso social que permita desarrollar los proyectos sin colocar en riesgo la vida y que los proyectos económicos causen el mínimo de impacto negativo en las vidas de las comunidades y no se rompa el tejido de interrelaciones con la naturaleza.

La consulta y la acusación a que ésta sea un obstáculo tiene de trasfondo una contradicción en torno a cómo se perciben los bienes comunes de la sociedad y su apropiación.

Esta contradicción que hoy se expresa sobre la naturaleza de los bienes comunes, la sostenibilidad de la vida como primer fundamento de la economía no sólo enfrenta a gobierno con los pueblos indígenas y negros sino que se ha vuelto un escenario más amplio que involucra a campesinos, a mineros, artesanales, a pobladores urbanos. Este es el punto nodal y no se debe estigmatizar para hacer culpable a los que quieren preservar el mundo y no desbastarlo por ambiciones. El debate sobre la consulta se tiene que precisar con claridad. Para los empresarios nacionales y extranjeros, para los representantes del capital se trata de extraer lo más rápido posible del territorio los "recursos" mineros; para un grueso de la sociedad se trata de colocarlos en función de la vida sin matar la vida.

Por eso la consulta libre, previa e informada incorporada al ordenamiento político es apenas un pequeño camino de la democracia, no es la democracia que es más amplia. La democracia tiene que ver cómo la sociedad se organiza para gestionar los bienes comunes de tal manera que todos tengamos la capacidad de decidir, de proceder, de consensuar una manera de redistribuir y de aprovechar los bienes comunes para ser colocados al servicio del engrandecimiento de la vida de la sociedad en su conjunto.

Por ello, la consulta no debe ser sólo a los pueblos indígenas y negros sino al conjunto de la sociedad en sus diversidad cultural y nacional. Por algo somos una nación plurietnica y multicultural. Tienen los mismos derechos las comunidades campesinas, los pobladores urbanos, los trabajadores y no sólo los gremios de empresarios agrupados en sus distintas variantes que son apenas una parte de la sociedad que ha detentado, hasta ahora, la voluntad y capacidad de decidir. La democracia es permitir la irrupción y presencia de la otra parte de la sociedad, hasta ahora, negada.

Invisibilizar, restringir y corromper.

La oligarquía ha asumido distintas políticas para negar la democracia a una mayoría de la sociedad. Son muchas pero vamos a referirnos con cosas concretas a tres. La mejor manera de no permitir la participación en los destinos de la nación es invisibilizar o no reconocer la existencia de sujetos. Sólo hasta el año 1991 son reconocidos los indígenas y los negros en la condición de sujetos de derechos con una propia cosmovisión. Y esta conquista fue una larga lucha que fue posible ganarla por una correlación de fuerzas favorables que rompió el monopolio del binomio liberal-conservador y se expresó otra opción política democratizadora de izquierda en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue esta fuerza de sociedad la que permitió abrir ese boquete, todavía muy tenue, pues quedaron los campesinos y un montón de comunidades culturales, por fuera de ese reconocimiento.

La ciudadanía se amplió en el 1991 pero no tanto como para expresar todas las fuerzas sociales o a toda la ciudadanía de la nación. Todavía Colombia es

una ciudadanía restringida y limitada.

Esto de lo restringido y limitado es otra de las características de contener la presencia de sujetos invisibilizando y despreciados por siglos, por eso generan todos los dispositivos para que su presencia sea limitada.

El caso del tratamiento a los derechos de los negros es un ejemplo vivo. A estos se les reconoce la territorialidad colectiva y su propia forma de organizarse para ejercer el ser, su proyecto de vida, sólo en su calidad de poblador de la ruralidad.

La extensión de este reconocimiento a las comunidades negras urbanas es nula pues en las ciudades no pueden agruparse en consejos comunitarios y no pueden acceder a la territorialidad de manera colectiva. Y esto tiene una grave connotación puesto que a pesar de ser los negros un componente mayoritario en la ciudad de Cali, a manera de ejemplo, a este no se le consulta para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial ni se considera su territorio como propiedad colectiva. Los negros no existen en Cali ni en otras ciudades como Cartagena, Quibdó, Buenaventura, Barranquilla, Popayán y otras donde hay asentamientos de poblaciones negras construidas históricamente. Al contrario los Planes de Ordenamientos Territoriales los vienen despojando y expulsando a nuevas periferias. Estos ordenamientos han sido aprobados sin su participación violándose el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Se le reconoce formalmente los derechos a los pueblos indígenas pero se les restringe territorialmente, se les niega en los hechos sus posibilidades reales de influenciar y decidir. Los planes de desarrollo tienen que tener un contenido pluricultural y diverso en lo étnico. Pero el Estado se niega a que en los planes de desarrollo se hagan capítulos especiales de etnodesarrollo a pesar de ser un mandato constitucional y mucho menos que se concerten con las regiones, como se establece la planeación para el desarrollo en la constitución nacional, a no ser que región sea identificada como los representantes en el congreso y esté restringido a los gremios de empresarios.

Los gobernantes pensaron que adicionar cierto reconocimiento de derechos a los pueblos negros e indígenas podría ser un formalismo más que podría burlarse o cuando más ser un asunto gestionado rápidamente mediante unas farsas, como pasa en la democracia colombiana donde el sentido de las consultas, el referéndum y otros mecanismos quedan a voluntad del Congreso de la República. También pensaron que acudiendo al expediente de la corrupción a líderes y dirigentes con la finalidad de que, a cambio de unos pocos millones, lograrían aprobar amañadamente los proyectos y todas las consultas.

Los pueblos van madurando y se van sacudiendo de la corrupción. Lo más curioso es que el Estado después de corromper mediante la repartición de mermeladas lanza acusaciones buscando desprestigiar la consulta previa, libre e informada

buscando con ello fomentar una actitud de repudio a la consulta. No son las organizaciones comunitarias las que tienen los recursos económicos para comprar avales y aprobaciones de proyectos, es la elite dominante la que lo puede hacer, la democracia de la chequera que comienza a fallarle al régimen. La silla vacía en una investigación relata cómo el Estado ejerce la compra a consultores y a procesos organizativos, lo que sería bueno colocar en el debate.(3 no es la democracia, lo malo no es la consulta a la ciudadanía, ni a los pueblos negros e indios, ni son las licencias ambientales que deben ser rigurosas y precedidas de estudios serios de impactos sociales. Al contrario falta mucha democracia que vaya más allá de simples elecciones y que involucren a la sociedad en la gestión de los bienes comunes para colocarlos al servicio de todos, para una democracia de la vida y el bien-estar, del sentido protagónico de todos los sujetos de la nación plurietnica y pluricultural. Que la democracia sea la esencia de la vida de la sociedad donde todos tenemos información de los proyectos y planes, que participamos en la constitución de los mismos de acuerdo a una diversidad de visiones que asumen un consenso de nación en equidad y paz.

Notas:

1. Entrevista a Vargas Lleras, diario el tiempo, agosto 18 del 2014.

2. Ibid.

3. La silla vacia. Rosa Solís, el dolor de cabeza de los grandes proyectos del Gobierno. Marzo3 del 2012.

50 años junto
al pueblo